



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Resolución

Número:

Referencia: EX-2022-40406314-APN-DD#UIF - BINGO P [REDACTED] S.A. S/SUPERVISIÓN EXTRA SITU

VISTO el Expediente N° EX-2022-40406314-APN-DD#UIF del Registro de esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, organismo con autonomía y autarquía financiera en jurisdicción del MINISTERIO DE JUSTICIA, la Ley N° 25.246 y modificatorias, el Decreto N° 290 del 27 de marzo de 2007 y modificatorios y las Resoluciones UIF Nros.199 del 31 de octubre de 2011 y sus modificatorias 111 del 14 de junio de 2012 -vigente al momento de los hechos actualmente reemplazada por la 90 del 13 de junio de 2024, 194 del 28 de septiembre de 2023 y 93 del 2 de junio de 2023, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el artículo 5° de la Ley N° 25.246 se creó la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (en adelante, la “UIF”), organismo con autonomía y autarquía financiera en jurisdicción del MINISTERIO DE JUSTICIA.

Que la referencia a la Ley N° 25.246 a lo largo de la presente resolución, se efectúa conforme el texto ordenado según por las modificatorias vigentes al momento de los hechos (Ley N° 26.683-B.O. 21-6-2011- y Ley N° 27.440-B.O. 11-5-2018-, previo a la modificación introducida por la Ley N° 27.739 B.O. 15/3/2024).

Que el artículo 20 de la Ley N° 25.246 enumeró los Sujetos Obligados a informar ante esta UIF en los términos previstos en el artículo 21 de la citada norma, contemplado en el entonces inciso 3) a las personas humanas y/o jurídicas, u otras estructuras con o sin personería jurídica, que como actividad habitual, exploten, administren, operen, o de cualquier manera, organicen, por sí o a través de terceros, cualquier modalidad o sistema de captación de juegos de azar.

Que los artículos 23 y 24 del Capítulo IV de la Ley N° 25.246 establecieron el régimen sancionatorio que resulta aplicable ante posibles incumplimientos a las obligaciones establecidas en la normativa de la UIF.

Que por la Resolución UIF N° 199/2011 –de aplicación al presente caso conforme lo previsto en el artículo 43 de la Resolución UIF N° 194/2023- se reglamentaron las obligaciones que los Sujetos Obligados en cuestión debían cumplir ante esta UIF.

Que a través de la Resolución UIF N° 111/2012 se reglamentó el procedimiento sumarial tendiente a la aplicación de las sanciones previstas en el Capítulo IV de la Ley N° 25.246.

Que así las cosas, en el marco del expediente citado en el VISTO, se dictó la RESOL-2023-93-APN-UIF#MEC del 2 de junio de 2023 (Orden N° 39) suscripta por el entonces Presidente de dicha Unidad, la “Resolución de Apertura”) con el objeto de deslindar las responsabilidades que le pudieran corresponder a BINGO P S.A. (CUIT N° 30-2756-3) (“BINGO P” y/o la “Sociedad” y/o el “Sujeto Obligado”), así como a los integrantes de su órgano de administración y Oficial de Cumplimiento en funciones al tiempo de la supervisión y durante el periodo infraccional, por haber incumplido en principio las previsiones contenidas en los artículos 20 bis, 21 incisos a) y b) y 21 bis de la Ley N° 25.246, vigente al momento en que los hechos objeto del presente sumario tuvieron lugar, y los artículos 3° incisos e), f) y g) y 19 incisos 1) y 2) de la Resolución N° 199/2011 y sus modificatorias

Que asumida la Instrucción con fecha 26 de junio de 2023 y luego de realizadas las averiguaciones correspondientes, se citó en calidad de sumariado a la BINGO P S.A. (CUIT N° 30-2756-3) y, al Sr. Jonatan Sebastián S (CUIT N° 20-5099-3) en su doble carácter de Oficial de Cumplimiento y miembro del órgano de administración durante el período objeto del Sumario, a los fines de que presenten descargo y ofrezcan la prueba que haga a su derecho, otorgándoles a tales fines, la posibilidad de tomar vista de las actuaciones, en los términos del artículo 17 y 19 de la Resolución UIF N° 111/2012 (Orden N° 045).

Que asimismo en dicha oportunidad se intimó al sumariado a fin de obtener el Código de Usuario del Sistema de Notificaciones y Tramitación Electrónica de Expedientes previsto en la Resolución UIF N° 96/2018.

Que de las constancias del expediente surge que los sumariados fueron notificados según el siguiente detalle: (i) BINGO P S.A. el 30 de junio de 2023 (Orden N° 046) y; (ii) Jonatan Sebastián S el 6 de julio de 2023 (Orden N° 050).

Que a Orden N° 049 obra agregada la constancia de solicitud y retiro del Código de Usuario del Sistema de Notificaciones y Tramitación Electrónica de Expedientes de fecha 7 de julio de 2023, suscripta por Jonatan Sebastián S.

Que con fecha 14 de julio de 2023, en legal tiempo y debida forma, presentó descargo (v. Orden N° 052) Jonatan Sebastián S por derecho propio, en carácter de Oficial de Cumplimiento y Director de BINGO P S.A., con el patrocinio letrado del Dr. Martín R (Matricula CPACF T°118 F°) quien a su vez actúa como apoderado de la firma BINGO P S.A. cuyo Poder Especial obra Orden N° 061.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Resolución UIF N° 111/2012, la Instrucción citó a prestar declaración a BINGO P S.A. y al Sr. Jonatan Sebastián S a las audiencias fijadas para el día 25 de octubre de 2023 (Orden N° 065).

Que dicha providencia fue debidamente notificada a los sumariados a través del sistema de Tramitación y Notificación Electrónica de Expedientes.

Que a Orden N° 069 consta el acta de la audiencia celebrada con el Sr. Jonatan Sebastián S por sí y en su carácter de apoderado de BINGO P S.A.

Que el 5 de septiembre de 2023 se abrió el procedimiento a prueba conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Resolución UIF N° 111/2012 (Orden N° 063).

Que dicha providencia fue debidamente notificada a los sumariados a través del sistema de tramitación y notificación electrónica de expedientes.

Que en dicha ocasión, la Instrucción resolvió las siguientes cuestiones: i) Se tuvo por agregada en copia simple la documental obrante en los órdenes 54, 55, 56, 57 y 58; ii) Se ordeno citar a prestar declaración testimonial en los términos del artículo 24 de la Resolución UIF N° 111/2012 al Sr. E. A. a la audiencia fijada para el día 25 de octubre de 2023 (Orden N° 065). Dicha providencia fue debidamente notificada a los sumariados a través del sistema de tramitación y notificación electrónica de expedientes. En el Orden N° 068 consta Acta Testimonial y; iii) Intervención de la Dirección de Análisis: Desestimada en el Orden N° 070.

Que el 8 de noviembre de 2023 la Profesional de Apoyo certificó la prueba ofrecida y producida en el presente expediente e informó a la Instrucción que no se verificaban pruebas pendientes de producción (Orden N° 071).

Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 29 de la Resolución UIF N° 111/2012, en idéntica fecha se dio por concluido el período probatorio y se le corrió traslado a los sumariados para que en el plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos presenten sus alegatos (Orden N° 072).

Que en consecuencia, el 29 de noviembre de 2023 Jonatan Sebastián S. [REDACTED] por derecho propio y en su carácter de apoderado de BINGO P. [REDACTED] S.A. con el patrocinio letrado del Dr. Martín R. [REDACTED] presentaron alegatos (Orden N° 075) los que se tuvieron por presentados en legal tiempo y forma en el Orden N° 076.

Que por último, el 20 de marzo de 2024 la Instrucción ordenó el pase de las actuaciones a la elaboración del informe final previsto en el artículo 30 de la Resolución UIF N° 111/2012 (Orden N° 081).

Que el 21 de marzo de 2024 se certificó, mediante la providencia de control, el cumplimiento de todas las etapas formales del procedimiento sumarial (Orden N° 082).

Que, la Instrucción elaboró el Informe Final IF-2024-54190550-APN-DRAS#UIF (Orden N° 83), del 24 de mayo de 2024, en el cual se analizaron las imputaciones detalladas en la Resolución de Instrucción, teniendo en cuenta para ello la normativa aplicable, la defensa planteada por los sumariados, y las pruebas producidas en autos.

Que se procederá a analizar y resolver las imputaciones detalladas en la Resolución de Instrucción, teniendo en cuenta para ello la defensa planteada por los sumariados, las pruebas producidas en autos y las conclusiones a las que arribó la Instrucción en su Informe Final.

Que en relación con la imputación vinculada a Herramientas Tecnológicas para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT), la Instrucción tuvo por acreditado el cargo, en infracción artículo 3° incisos f) y g) de la Resolución UIF N° 199/2011 y modificatorias y sugirió la aplicación de una multa de PESOS CIEN MIL (\$100.000).

Que para arribar a dichas conclusiones, la Instrucción en primer lugar destacó que en la Resolución de Apertura se imputó: *“Se verificó que el mismo no cuenta con herramientas tecnológicas acordes con su desarrollo operacional, que le haya permitido establecer de una manera eficaz el sistema de control y prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo; ni contar con medidas que le permita consolidar electrónicamente las operaciones que realiza con sus clientes, así como analizar o monitorear distintas variables para identificar ciertos comportamientos y visualizar posibles operaciones sospechosas. Que, en virtud de lo expuesto, cabe concluir que incumple, prima facie, las previsiones del artículo 3° incisos f) y g) de la Resolución UIF N° 199/2011.”*

Que dicho incumplimiento fue constatado por los inspectores de la UIF en su Informe Final de fecha 17 de noviembre de 2022 (Orden N° 015).

Que, en el IF-2024-61267870-APN-DAJ#UIF, embebido al presente y que forma parte del mismo, se detallan las operaciones imputadas, las que se desprenden del informe técnico IF-2022-124549093-APN-DSUP#UIF y que se encuentran asimismo detalladas conforme IF-2024-61239800-APN-DAJ#UIF.

Que en lo que hace a la normativa aplicable, cabe señalar que el artículo 3° incisos f) y g) de la Resolución UIF N° 199/2011 establecen lo siguiente: *“A los fines del correcto cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 20 bis, 21 y 21 bis de la Ley N° 25.246 y modificatorias, las personas físicas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar deberán adoptar una política de prevención en materia de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, de conformidad a la normativa vigente. La misma deberá contemplar por lo menos los siguientes aspectos: (...) f) La implementación de herramientas tecnológicas acordes con su desarrollo operacional, que le permita establecer de una manera eficaz el sistema de control y prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo; g) La implementación de medidas que les permitan consolidar electrónicamente las operaciones que realizan con sus clientes, así como herramientas tecnológicas tales como software, que les permitan analizar o monitorear distintas variables para identificar ciertos comportamientos y visualizar posibles operaciones sospechosas...”*

Que en oportunidad de ejercer su derecho de defensa, los sumariados en su escrito de descargo expusieron lo informado a la UIF en el marco de la supervisión respecto de cuál es la política de identificación y conocimiento del cliente, así como los sistemas y herramientas utilizadas para el monitoreo de operaciones, más precisamente en operaciones en efectivo y/o fraccionamiento y/o desdoblamiento de fichas.

Que seguidamente manifestaron (...) *“la empresa ha desarrollado un proceso de debida diligencia que permite tener un control eficaz de sus operaciones”* (...) *“dicho proceso incluye la categorización en riesgo de todos los clientes que han ganado premios y la aplicación de procesos de debida diligencia acordes con los riesgos detectados. Estos procesos son realizados en el mes subsiguiente a la realización de las operaciones y documentados debidamente a través de informes de debida diligencia mensual (y de informes de categorización), tal como fuera informado a través de la nota del Oficial de Cumplimiento a la UIF del 8 de julio de 2022”*.

Que agregaron que dicha información fue brindada en el marco de la supervisión y que si se hubieren solicitado dichos informes no hubiesen llegado a la conclusión de efectuar la imputación.

Que por otro lado, manifestaron que (...) *“La empresa consolida todas las operaciones de sus clientes, realiza mensualmente un informe en donde se señalan las operaciones relevantes de sus clientes, con sus respectivas actualizaciones en la segmentación del cliente y en su caso, emite un reporte de operación inusual que luego deberá ser analizada para concluir si se trata de una operación sospechosa o no”*. El Sujeto Obligado seguidamente explica el monitoreo de los slots (maquina tragamonedas) y de su cumplimiento con la normativa.

Que con relación al párrafo precedente manifestaron que (...) *“la empresa cuenta con la capacitación permanente de sus empleados a los efectos de que puedan identificar de manera manual, ciertos comportamientos inusuales y visualizar posibles operaciones sospechosas”*.

Que respecto del análisis y monitoreo variables para identificar ciertos comportamientos y visualizar operaciones sospechosas, manifestaron que (...) *“la empresa, incluye verificaciones con listas internacionales (World-Check), Verificación ANSES, Informes de Nosis, Información negativa en internet, verificación contra lista de REPET de la UIF, verificación de domicilio. Por otra parte, en las capacitaciones realizadas al personal a través de una*

herramienta de e-learning se identifican comportamientos inusuales de los clientes que se podrían presentar y se le requiere al personal su reporte en caso de presentarse”.

Que asimismo, indicaron que “[s]e debe poner de resalto que a diferencia de la regulación existente en PLA/FT para sujetos obligados financieros, no se requiere para la industria del juego el establecimiento de perfiles transaccionales para los clientes, ante la imposibilidad de prever en juegos de azar los montos de premios que los clientes ganarán en el futuro.// Es por ello que en la industria del juego los procesos de categorización de riesgo y debida diligencia se efectúan en forma ex-post, a diferencia de los sujetos obligados financieros, que categorizan a los clientes y aplican la debida diligencia a la apertura de cuenta.”

Que para finalizar, con respecto a los clientes SB. y CRA. manifestaron que (...) “Se han realizado en forma mensual informes de debida diligencia (y de informes de categorización) durante todo el año 2021 y en ellos se encuentran todas las operaciones de los clientes SB y CRA. Con lo cual, sí se han advertido las operaciones de esos clientes, se las han monitoreado, pero no se las han considerados sospechosas por los argumentos que se detallarán en el punto del presente descargo referido a la imputación Análisis y Detección de Operaciones Sospechosas”. (...) “ha quedado demostrado tanto en el marco de la supervisión como en el presente descargo que la empresa posee un sistema acorde a su negocio y además, que es efectivo”.

Que respecto a la declaración testimonial I. E. A. (v. Orden N° 68) quien se desempeña Gerente General, con respecto al acceso a un slot (tragamonedas) se refirió, (...) “El cliente ingresa a la sala y puede acceder de forma autónoma a iniciar una sesión de juego en un slot, ya sea mediante dinero en efectivo, ingresa el billete en los billetteros del slot, o mediante un ticket, TITO (ticket in- ticket out) por idéntico valor al que le fuera entregado en la caja a cambio del efectivo que él entrega” (...) “para el pago de los mismos siempre que al final de la sesión de juego haya arrojado saldo de créditos a favor del cliente. Al mismo tiempo, no quiere decir que sea una ganancia. En ese momento se emite un ticket con el correspondiente valor en pesos argentinos el cual va a ser cambiado por billetes en las cajas de pago” (...) varios comportamientos promedio que va de la mano con la asiduidad de los clientes. Los que vienen todos los días podemos decir que tienen más premios, pero que tengan mayor cantidad de premios para el caso puntual no implica que tenga movimientos sospechosos porque no significa que sea una ganancia para el cliente. El procedimiento por el cual se explica que podría no ser una ganancia es que el cliente ingresa dinero TITO y cuando se retira se puede retirar en cero o con menor dinero al que ingreso en la máquina. En cuanto al seguimiento, nosotros lo realizamos a partir de llegar al monto mínimo definido por UIF. El slot cuando se llega a ese monto freeza la pantalla con el valor de premio en la misma, no permite continuar jugando. Se acerca una auxiliar o jefe de sala, valida la formalidad del premio y, mediante una llave autoriza la emisión del TITO por el valor del premio. Este asistente o jefe toma el TITO y junto con el cliente se dirigen a la caja. Allí se completa el formulario UIF y posteriormente se procede al pago del premio. Estos tickets que tienen umbral de UIF tienen modalidad de jackpot, es decir, estos TITO no pueden ser insertados en la misma u otra máquina, deben ser pagados sí o sí en la caja” (...) “cuando un cliente deja de jugar en un slot para realizar cualquier otra actividad dentro del bingo y luego decide volver a jugar en los slots (...) “El primer grupo que realiza otra actividad y vuelve al mismo u otro slot a iniciar otra sesión de juego con el o los tickets que posee en su poder o mediante dinero en efectivo. El segundo grupo que previo o después de realizar otra actividad, cobra los premios en caja y vuelve a iniciar una sesión de juego en el mismo u otro slot con dinero en efectivo. (Otra actividad puede ser descansar, comer algo, etc.) Un tercer grupo que realiza cualquier otra actividad en el Bingo y se retira con el TITO y regresa en otro momento del día para continuar con otra sesión del juego, siempre y cuando la validez del ticket esté vigente”.

Que respecto a las Herramientas Tecnológicas refirió (...) “la empresa utiliza un registro integral de pagos mayores digital para cuando los importes alcanzan los montos determinados por la normativa UIF” (...) “Tiene

diferentes secciones, se compone de un formulario digital. Ese formulario digital posee, por un lado, la característica de número de formulario donde la aplicación identifica cada nuevo formulario con un nuevo número único e irrepetible de forma automática, esto lo que previene es la posible repetición en la numeración correlativa y la correcta legibilidad de los dígitos. Al momento de establecer la numeración, la fecha y hora también se cargan de manera automática al formulario” (...) “El segundo punto del formulario es la identificación del slot, donde cada slot posee un código QR el cual es leído por la aplicación al momento de iniciar el pago mayor UIF” (...) “Como tercer punto, yendo a la parte de identificación del cliente, cuando se trata de completar los datos del cliente, la aplicación lee el DNI del cliente y mediante una API (interface) con RENAPER y NOSIS se vuelcan los datos en el formulario de manera automática. De esta manera de CUIL/CUIT, domicilio real, empresa donde desarrolla sus tareas, actividad registrada en la AFIP y si es PEP son tomados de las bases de datos de NOSIS automáticamente con la última información disponible” (...) el cuarto elemento del formulario digital va a ser la identificación del ticket-out, la aplicación permite el escaneo del ticket y se completa la información necesaria para el pago del premio UIF. Adicionalmente, todas las herramientas adicionales que se utilizan en el proceso de debida diligencia como World-check, NOSIS, información negativa de Google, Google Maps, ANSES y AFIP”.

Que sentado lo anterior, cabe señalar que, de la prueba producida en estas actuaciones ha quedado acreditado, que los sistemas implementados por el Bingo son deficientes a la luz de la normativa que se imputa como incumplida, pues dichos sistemas, así como el procedimiento informado por el Sujeto Obligado, no permiten vislumbrar una herramienta tecnológica que permita establecer de una manera eficaz el sistema de control y prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Tampoco permiten evidenciar la consolidación electrónica de las operaciones efectuadas con los clientes, ni tampoco, permiten el análisis y/o monitoreo de estas, implicando ello, el elevado riesgo, en la no detección de operaciones inusuales.

Que en el IF-2022-71594038-APN-DSUP#UIF obra el archivo “Nota Oficial de Cumplimiento Identificación y Monitoreo.pdf”, que en lo relativo al punto requerido informó que: *“La empresa utiliza un registro de operaciones donde figuran todas las operaciones de los clientes, junto con los datos suministrados en el formulario de identificación del cliente, firmada por el mismo al recibir un premio/canje de valores por sobre los \$. 300.000. Las operaciones de los clientes son consolidadas para los últimos 12 meses, con el fin de (junto otra información relevante) categorizar en riesgo a los mismos y justificar el origen de los fondos en función a las políticas y procedimientos de PLA/FT...” “... El personal es entrenado a través de una herramienta de e-learning que incluye capacitación para detectar operaciones de fraccionamiento y/o desdoblamiento de fichas y la obligación de reportarlas a la Unidad de Cumplimiento a través del jefe de sala.”.*

Que como corolario de lo anterior, la Dirección de Supervisión señaló que *“[s]in perjuicio de lo expuesto, y atento a que se han advertido operaciones efectuadas por los clientes: S. B. y C. R. A., que en función de la cantidad de operaciones efectuadas, volumen y frecuencia de la mismas, no han sido advertidas ni detectadas/monitoreadas por el sistema utilizado por el sujeto obligado, que acorde a los volúmenes operados, debieron haber sido identificados en función de las políticas de PLA/FT, conforme la normativa UIF aplicable”.*

Que, por lo tanto, el Sujeto Obligado debía, conforme la normativa señalada, contar con dichas herramientas tecnológicas con el alcance indicado por la Dirección de Supervisión analizado ut supra.

Que, por el contrario, el procedimiento informado por el Sujeto Obligado es deficiente a la luz de la normativa analizada, tal como fue expuesto previamente, lo cual puede traer aparejado falencias en el registro de los premios y de asignación de riesgo.

Que, así, se observó que dos clientes realizaron una cantidad de operaciones por un volumen y frecuencia que debieron ser advertidos por el sistema utilizado, lo que da cuenta que el mismo no resulta eficiente a efectos de la PLA/FT.

Que, con respecto a la obligación de implementar herramientas tecnológicas no caben dudas que el Sujeto Obligado debe tener establecidos procesos que les permitan identificar, evaluar, monitorear, administrar y mitigar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo con un Enfoque Basado en Riesgo.

Que este enfoque debe constituir un fundamento esencial para la asignación eficaz de recursos en todo el régimen antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo.

Que es por ello que se exige a los Sujetos Obligados que implementen medidas basadas en riesgo e implementen eficientemente las recomendaciones internacionales.

Que en consonancia con lo expuesto, la existencia de herramientas tecnológicas constituye una piedra fundamental a fin de establecer de una manera eficaz los sistemas de control y prevención de LA/FT de acuerdo a los riesgos identificados.

Que, por lo tanto, la inexistencia o deficiencia de un sistema informático y desarrollo tecnológico acorde con el desarrollo operacional del Sujeto Obligado, impide a la entidad consolidar electrónicamente las operaciones que realiza con sus clientes, analizar o monitorear distintas variables para identificar ciertos comportamientos y visualizar posibles operaciones sospechosas.

Que ello nos indica la relevancia de la exigencia establecida en la norma, con lo cual el Sujeto Obligado sin dudas debió contar con dichas herramientas a fin de prevenir el LA/FT en la entidad.

Que, así las cosas, es dable destacar que la falta de monitoreo de operaciones demuestra claramente la falta de cumplimiento a las políticas de prevención, cuestión clave para la efectiva prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Que, asimismo, dicha omisión implica un elevado nivel de riesgo, para el sistema preventivo en su totalidad, dado que la no generación de análisis y resolución de alertas impide claramente que la entidad cumpla en forma adecuada con los requerimientos normativos impartidos por esta Unidad, relacionados con la detección de operaciones sospechosas.

Que el monitoreo permanente significa el escrutinio de las operaciones para determinar si éstas son consistentes con el conocimiento que la entidad tiene del cliente y la naturaleza y propósito del producto y de la relación comercial.

Que este también incluye la detección de los cambios en el perfil del cliente (por ejemplo, su comportamiento, uso de los productos y cantidad de dinero involucrada), y mantener un registro actualizado de tales cambios, puede requerir de la aplicación de medidas nuevas o adicionales de debida diligencia del cliente (DDC)

Que el monitoreo de las operaciones es un componente clave para la identificación de operaciones que son potencialmente sospechosas que se apartan del perfil.

Que aquí vale hacer referencia a la defensa opuesta por los sumariados en el sentido de que en el caso de los juegos de azar no se puede definir perfiles ex ante, ahora bien, cuando se trata de clientes que efectúan numerosas

operaciones, la debida diligencia se realiza luego del primer premio entregado cuyo monto sea pertinente. Así, si la cliente continua, como es el caso, operando por volúmenes y con una frecuencia tal, el sistema debería ya detectar esas operaciones y en su caso emitir la correspondiente alerta.

Que finalmente, cabe destacar que los informes de debida diligencia aludidos por los sumariados no dan cuenta de la efectividad de las herramientas tecnológicas implementadas. Los mismos son efectuados manualmente por “Business Compliance Solutions” lo cual no supe el deber de contar con herramientas tecnológicas acordes al desarrollo operacional que permitan establecer de manera eficaz el sistema de control y prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, que también le permita analizar o monitorear distintas variables para identificar ciertos comportamientos y visualizar posibles operaciones sospechosas así como contar con medidas que permitan consolidar electrónicamente las operaciones que realiza con sus clientes.

Que en mérito de lo expuesto, la Instrucción concluyó que el cargo relacionado con herramientas tecnológicas implementadas, en infracción artículo 3° incisos f) y g) de la Resolución UIF N° 199/2011, se encuentra acreditado y aconsejó la aplicación de una sanción de multa PESOS CIEN MIL (\$100.000).

Que en relación con la imputación vinculada al Registro y Análisis de Gestión de Riesgo la Instrucción tuvo por acreditado el cargo en infracción al artículo 3° inciso e) de la Resolución UIF N° 199/2011 y modificatorias y sugirió la aplicación de una multa de PESOS CIEN MIL (\$100.000).

Que para arribar a dichas conclusiones, la Instrucción en primer lugar destacó que en la Resolución de Apertura se imputó: *“Se verificó que en los casos de los clientes B.S. y R.A.C., que se mencionan en el Informe Técnico Final se detectaron una serie de operaciones que por su monto y frecuencia, no han sido detectadas ni incorporadas en el registro de análisis y gestión de riesgo por el sistema utilizado por el Sujeto Obligado, por lo tanto, no fueron analizadas. En tal sentido y en función de los montos, y cantidades de premios acumulados, estas circunstancias no fueron debidamente tratadas ni analizadas, ni tampoco obra evidencia del análisis de la operatoria global del cliente. Estas falencias, consecuentemente, conllevan el riesgo de no detección de operaciones inusuales, y por ende, el no reporte de operaciones sospechosas. Que, en virtud de lo expuesto, cabe concluir que incumple, prima facie, las previsiones del artículo 3° inciso e) de la Resolución UIF N° 199/2011”*.

Que dicho incumplimiento fue constatado por los inspectores de la UIF en su Informe Final de fecha 17 de noviembre de 2022 (Orden N° 015).

Que, en el IF-2024-61267870-APN-DAJ#UIF, embebido al presente y que forma parte del mismo, se detallan las operaciones imputadas, las que se desprenden del informe técnico IF-2022-124549093-APN_DSUP#UIF y que se encuentran asimismo detalladas conforme IF-2024-61239800-APN-DAJ#UIF.

Que en lo que hace a la normativa aplicable, cabe señalar que el artículo 3° inciso e) de la Resolución UIF N° 199/2011 establecen lo siguiente: *“A los fines del correcto cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 20 bis, 21 y 21 bis de la Ley N° 25.246 y modificatorias, las personas físicas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar deberán adoptar una política de prevención en materia de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, de conformidad a la normativa vigente. La misma deberá contemplar por lo menos los siguientes aspectos: (...) e) La elaboración de registros de análisis y gestión de riesgo de lavado de activos y de financiación del terrorismo de las operaciones inusuales detectadas y aquellas que por haber sido consideradas sospechosas hayan sido reportadas. La información contenida en el aludido registro deberá resultar suficiente para permitir la reconstrucción de cualquiera de tales operaciones, y servir de elemento probatorio en eventuales acciones judiciales entabladas. El mencionado registro tendrá tratamiento confidencial,*

amparado conforme las previsiones del artículo 22 de la Ley N° 25.246 y modificatorias”.

Que en oportunidad de ejercer su derecho de defensa, los sumariados en su escrito de descargo manifestaron que (...) “deviene necesario señalar que la empresa posee (y ha sido suministrado a la Dirección de Supervisión de la UIF) un registro de análisis y gestión de riesgo de lavado de activos y de financiación del terrorismo de las operaciones inusuales detectadas y aquellas que por haber sido consideradas sospechosas hayan sido reportadas (...) “no se puede pretender que se incluyan operaciones que no han sido consideradas inusuales por la empresa, sobre todo en función a que la empresa posee la información y documentación necesaria para considerar que en el caso de esos dos clientes no hubo siquiera una operación inusual, conforme los informes mensuales de debida diligencia (los cuales no fueron requeridos por la Dirección de Supervisión de la UIF, a pesar que la empresa los mencionó en la primera contestación al requerimiento efectuado el día 5 de julio de 2022)”.

Que seguidamente manifestaron que (...) “de acuerdo a la interpretación dada por la Dirección de Supervisión de la UIF se quiera interpretar que podrían haber sido consideradas como sospechosas las operaciones de esos dos clientes, no alcanza para señalar que la empresa no cuenta con un registro de análisis y de gestión de riesgo de las operaciones inusuales (...) “puesto que excede lo que exige la UIF en su Resolución 199/2011”.

Que en el mismo orden de ideas manifestaron que (...) “las operaciones realizadas por los dos clientes mencionados por la UIF, no fueron consideradas como “inusuales” en las tareas mensuales de debida diligencia llevadas a cabo durante el período de la revisión y por ende no fueron incorporadas al registro citado”.

Que asimismo, adjuntaron al descargo DOCE (12) informes mensuales de debida diligencia, DIEZ (10) planillas de categorización de riesgo de clientes y DIEZ (10) planillas de trabajo de debida diligencia correspondientes a 2021, en lo que manifestaron que se puede comprobar que ambos clientes fueron examinados cada vez que tuvieron premios en el período. Adjuntaron el soporte documental de todas las gestiones realizadas.

Que con respecto a la declaración testimonial I. E. A. (v. Orden N° 68) quien se desempeña Gerente General, con respecto al Registro y Análisis de Gestión de Riesgo se refirió, (...) “la empresa desarrolló un procedimiento de debida diligencia que permite tener un control eficaz de sus operaciones y ello se advierte en lo informado en el marco de la supervisión y conforme se indica en el manual de políticas y procedimientos de PLA/FT que tuvo a la vista la Dirección de Supervisión de la UIF. Concretamente el proceso incluye la categorización del riesgo de los clientes que han ganado premios y la aplicación de procesos de debida diligencia acordes con los riesgos detectados. Estos procesos son realizados en el mes subsiguiente a la realización de las operaciones y documentados debidamente a través de informes de debida diligencia mensual y de informes de categorización” (...) “Todas las operaciones de los clientes que superan los umbrales establecidos por la UIF se consolidan para poder categorizar el nivel de riesgo del cliente y poder aplicar el proceso de debida diligencia correspondiente”.

Que tal como surge del Informe Final de Supervisión, el Sujeto Obligado acompañó en el IF-2022-71594038APN-DSUP#UIF el Registro de análisis y gestión de riesgo (archivo BINGO P[REDACTED]-GESTIÓN DE ALERTAS 2021.pdf) por lo que no se reprocha el no contar con dicho registro, sino que el mismo resulta deficiente.

Que como lo sostiene la mencionada Dirección en su Informe Final, se detectaron una serie de operaciones correspondientes a dos clientes que en virtud de su monto y frecuencia debieron ser detectadas e incorporadas en el referido registro.

Que en orden a los antecedentes de este sumario y la normativa aplicable, la Instrucción concluyó que se ha podido acreditar que, al momento de la inspección, el Sujeto obligado contaba con un registro de análisis y

gestión de riesgo de las operaciones deficiente, conforme fuera detallado en la Resolución de Apertura. Lo manifestado por los sumariados en el descargo no logra revertir el cargo.

Que por lo expuesto, la Instrucción concluyó que el cargo por deficiencias en el Registro de Análisis y Gestión de Riesgo, en infracción al artículo 3° inciso e) de la Resolución UIF N° 199/2011, se encuentra acreditado y sugirió la aplicación de una sanción de multa de PESOS CIEN MIL (\$100.000).

Que en relación con la imputación vinculada a la falta de Análisis y Detección de Operaciones Sospechosas, la Instrucción tuvo por acreditado el cargo en infracción a los artículos 21 inciso b) de la Ley N° 25.246 y 19 inciso 1) y 2) de la Resolución UIF N° 199/2011 y modificatorias y sugirió la aplicación de una multa de PESOS NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS (\$93.426.376) Que para arribar a dichas conclusiones, la Instrucción en primer lugar destacó que en la Resolución de Apertura se imputó: *“Como consecuencia del incumplimiento detallado en el punto anterior para los clientes B.S y C.R.A., el Sujeto Obligado no realizó un análisis sobre las inusualidades de dichos comitentes y, consecuentemente, omitió reportarlas como operaciones sospechosas a la UIF. Por otra parte, fueron ignorados indicadores de alerta específicos de la actividad, previstos en el artículo 19° la Resolución 199/2011, a saber: “1) Los montos, tipos, frecuencia y naturaleza de las operaciones que realicen los clientes que no guarden relación con los usos y costumbres en las prácticas de mercado; 2) Los montos inusualmente elevados, la complejidad y las modalidades no habituales de las operaciones que realicen los clientes”*

Que, al efectuar el análisis de las operaciones de los clientes del Sujeto Obligado en general, se consideró la cantidad de premios cobrados por cliente, tomando en cuenta todos los premios y/o conversiones de valores realizadas por los clientes, y se observó la existencia de un cliente (S.B.) que cobró premios (o realizó conversiones) en ciento sesenta y ocho (168) ocasiones, y la existencia de otro cliente (C.R.A.) cobró premios (o realizó conversiones) en ciento ochenta y siete (187) oportunidades, destacándose que, del análisis de la base de datos aportada por el sujeto obligado, y considerando todas las operaciones realizadas por todos los clientes en el periodo bajo análisis, el promedio general de operaciones (cobros) fue de 3, 79.

Que, para la realización de su análisis, se tomó en especial consideración la cantidad de premios cobrados por los principales 15 clientes, y se elaboró un ranking de los diez clientes que mayor monto obtuvieron por premios cobrados en el periodo bajo estudio, siendo que se detectaron que los 8 (ocho) clientes menos significativos de esta selección, mostraban una diferencia menor entre ellos, mientras que los 2 (dos) clientes que mayor monto cobraron (S.B.) (C.R.A) mostraban una diferencia muy significativa respecto del tercer cliente (S.B. por \$ 47.408.706 y C.R.A. por \$46.017.670), comprobando en este sentido que estos dos clientes mostraban montos de premios ganados significativamente mayores, incluso al resto de los 10 mayores.

Que, en virtud de lo expuesto, cabe concluir que incumple, prima facie, las previsiones del artículo 21° inciso b) de la Ley N° 25.246 en función del artículo 19 incisos 1) y 2) de la Resolución N° 199/2011”.

Que dicho incumplimiento fue constatado por los inspectores de la UIF en su Informe Final de fecha 17 de noviembre de 2022 (Orden N° 015).

Que, en el IF-2024-61267870-APN-DAJ#UIF, embebido al presente y que forma parte del mismo, se detallan las operaciones imputadas, las que se desprenden del informe técnico IF-2022-124549093-APN-DSUP#UIF y que se encuentran asimismo detallados conforme IF-2024-61239800-APN-DAJ#UIF.

Que por su parte, la Resolución UIF N° 199/2011 establecía en el artículo 19 lo siguiente: *“En caso de detectarse operaciones inusuales los Sujetos Obligados deberán profundizar el análisis de las mismas, con el fin de obtener*

información adicional que corrobore o revierta la/s inusualidad/es, dejando constancia por escrito de las conclusiones obtenidas y de la documentación respaldatoria verificada, conservando copia de la misma. Los Sujetos Obligados deberán reportar a la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, conforme lo establecido en los artículos 20 bis, 21 inciso b) y 21 bis de la Ley N° 25.246 y modificatorias, aquellas operaciones inusuales que, de acuerdo a la idoneidad exigible en función de la actividad que realizan y el análisis efectuado, consideren sospechosas de Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo. Deberán ser especialmente valoradas, las siguientes circunstancias que se describen a mero título enunciativo: 1) Los montos, tipos, frecuencia y naturaleza de las operaciones que realicen los clientes que no guarden relación con los usos y costumbres en las prácticas de mercado; 2) Los montos inusualmente elevados, la complejidad y las modalidades no habituales de las operaciones que realicen los clientes”.

Que en lo que respecta, la Recomendación del GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI) N° 20 establece que: *"Si una institución financiera sospecha o tiene motivos razonables para sospechar que los fondos son producto de una actividad criminal, o están relacionados al financiamiento del terrorismo, a ésta se le debe exigir, por ley, que reporte con prontitud sus sospechas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)".*

Que a mayor abundamiento, el artículo 21 inciso b) de la Ley N° 25.246, vigente al momento en que los hechos objeto del presente sumario tuvieron lugar, establecía: *"Las personas señaladas en el artículo 20 de la presente ley quedarán sometidas a las siguientes obligaciones, conforme lo establezca la normativa que dicte la Unidad de Información Financiera (UIF): (...) b) Reportar a la Unidad de Información Financiera (UIF), sin demora alguna, todo hecho u operación, sean realizados/as o tentados/as, sobre los/las que se tenga sospecha o motivos razonables para sospechar que los bienes u otros activos involucrados provienen o están vinculados con un ilícito penal o están relacionados con la financiación del terrorismo, o con el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, o que, habiéndose identificado previamente como inusuales, luego del análisis y evaluación realizados por el sujeto obligado, no permiten justificar la inusualidad”.*

Que cabe señalar que de la norma transcripta se observan DOS (2) obligaciones principales, a saber: i) *“en caso de detectar operaciones inusuales los sujetos obligados deberán profundizar su análisis, (...) dejando constancia por escrito de las conclusiones obtenidas y de la documentación respaldatoria verificada, conservando copia de la misma...”* y ii) *“reportar a la UIF las inusualidades que sean consideradas sospechosas por el sujeto obligado .”*

Que, asimismo, la norma transcripta enumera algunos indicios a tener en cuenta en el análisis de las operaciones, como los que se detallan a continuación: los montos, tipos, frecuencia, modalidades no habituales, transacciones de similar naturaleza, cuantía o simultaneidad, entre otros.

Que en oportunidad de ejercer su derecho de defensa, los sumariados en su escrito de descargo manifestaron que (...) *“los clientes SB y CRA no realizaron operaciones inusuales precisamente porque en función al sistema de prevención de LA/FT que posee la empresa (la debida diligencia permanente que efectúa), se consideraron que eran operaciones dentro de los parámetros normales del juego de slot (además, los clientes fueron correctamente identificados y meritados sus operaciones, conforme lo exigido por la Resolución UIF N° 199/11)”* (...) y que *“sólo se trató de dos clientes que son jugadores habituales”* (...) *“Esos jugadores ingresan con efectivo, juegan y se retiran con efectivo. No tienen ningún comprobante que les pueda servir como para justificar el origen de ese dinero si lo quisieran depositar en una cuenta bancaria, etc. Todo ello, será demostrado en el presente descargo”.*

Que, seguidamente manifestaron (...) “las operaciones de los clientes fueron detectadas y analizadas todos los meses, en los cuales tuvieron premios sobre los umbrales de reporte sistemático (conforme lo prescripto en el artículo 7° de la Resolución UIF N° 70/11), y no fueron consideradas como inusuales”.

Que adjuntaron al descargo documentación en los citados informes mensuales de debida diligencia (y de informes de categorización).

Que respecto al incumplimiento al artículo 19 inciso 1) y 2) de la Resolución UIF N° 199/2011 manifestaron que (...) “los montos, las frecuencias y la naturaleza de los premios cobrados si guardan relación con los usos y costumbres en el juego, específicamente en el uso de los slots (máquinas tragamonedas). Los montos de premios acumulados de Premios aparentan ser elevados, pero no lo son como se explicará a continuación” (...) “si el saldo es superior al umbral de identificación establecido por la UIF tienen que pasar por caja e identificarse para cobrar el efectivo. No pueden utilizar la tarjeta TITO (Ticket In- Ticket Out) para seguir jugando. Esto sirve para explicar porqué los jugadores habituales pueden tener tantos premios en un mismo día”.

Que con relación a los montos cuestionados a los dos clientes manifestaron lo siguiente: “- Ambos clientes son ampliamente conocidos por nosotros: SB es cliente desde 2011 y CRA desde 2018. Se los ha identificado conforme lo exigido por la Resolución UIF N° 199/11. En el caso de SB era, en el período de la supervisión efectuada por la UIF, empleada de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), residía en la localidad de Vicente López, provincia de Buenos Aires y en el año 2021 tenía 66 años de edad, sin ningún tipo de información negativa según las fuentes consultadas; mientras que en el caso de CRA era, en el período de la supervisión efectuada por la UIF, el presidente de G [REDACTED] Compañía Petrolera S.A, compañía establecida en la localidad de P [REDACTED], donde también este residía CRA. No tenía además ningún tipo de información negativa. Esta información fue enviada oportunamente a la Dirección de Supervisión de la UIF.” - Las cifras correspondientes a cantidad de premios deben ser interpretadas teniendo en cuenta que el Bingo es un negocio de entretenimiento, el que no se limita al juego en los "Slots" (Tragamonedas) sino que incluye además espectáculos, comida, etc. Hay clientes que cuando ingresan al Bingo, pasan varias horas. Pueden jugar varias veces, ganando y perdiendo. El resultado final de un día no, es ni remotamente la suma de los premios sobre el umbral establecido por la UIF. Pueden haber premios por debajo del umbral, pero por sobre todo no se consideran las pérdidas que tienen los jugadores. -Respecto de la observación efectuada acerca de la cantidad de premios que los 2 clientes observados (SB y CRA) cobraron respecto a los otros 8 clientes (detallados en el siguiente cuadro) que más premios cobraron en el período de la revisión, debe tenerse en cuenta que los montos de premios cobrados por cliente están directamente relacionados con la cantidad de días y horas durante el día que los mismos estuvieron jugando, siendo los montos promedio de los premios relativamente similares. (...) - se puede afirmar que los clientes SB y CRA jugaron 88 días, cada uno, en promedio, en tanto que, el resto de los principales clientes jugó 20,5 días, es decir 4,3 veces más que el último grupo. Además de jugar más días, jugaron un 38,7% más de tiempo/día cada vez que fueron a jugar. La combinación de ambos factores resultó en un monto de premios promedio 6,8 veces superior por jugador para los clientes SB y CRA respecto del grupo de principales clientes utilizado por la UIF como base de referencia.”

Que seguidamente respecto del diferencial de montos de premios ganados por cada uno de los 2 clientes observados manifestaron que no es sacar conclusiones respecto a las importantes diferencias verificadas. Que no corresponde esperar una distribución normal en una muestra de apenas 10 observaciones y “que el monto promedio de los premios de SB y CRA resultó apenas 12,6% superior al monto promedio del resto de los jugadores considerados por la UIF”.

Que, por último, manifestaron que (...) “los informes mensuales de debida diligencia no se hayan considerado a

los montos de los premios de los clientes SB y CRA como inusuales ni tampoco a la acumulación de premios, en tanto que la misma fue exclusivamente el resultado de más tiempo de juego”.

Que surge de la declaración testimonial I. E. A. (v. Orden N° 68) al ser preguntado sobre qué elementos se tienen en cuenta a la hora de calificar como sospechosa una operación y, en consecuencia, realizar un ROS que, (...) *“Sospechosa es una operación inusual que no se puede explicar, luego del análisis en base a documentación e información obtenida se efectúa un informe con fundada opinión al respecto. Los casos mencionados por la UIF no se emitieron ROS porque no se consideró que los montos y las frecuencias de los premios constituyesen per se un comportamiento sospechoso en los slots, sino de clientes asiduos sobre los cuales se contaba con un adecuado respaldo documental. En el caso puntal del origen de los fondos estaba cubierto. La cantidad de premios y los montos totales no bastan ni son suficientes para que se considere sospechosa una operación, esto debido a lo mencionado previamente de como es el comportamiento en una sesión de juego, donde esos premios no necesariamente son ganancia”.*

Que en el orden a los antecedentes de este sumario y la normativa aplicable, esta Instrucción concluye que se ha podido acreditar que los clientes en estudio operaron de la siguiente manera:

a) S. B. cobro premios en 168 ocasiones por el valor de PESOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS SEIS (\$47.408.706) (periodo de estudio 04/01/2021 al 29/12/2021) y;

b) C. R. cobro premios en 168 oportunidades por el valor de PESOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA (\$46.017.670) (periodo de 11/02/2021 al 30/12/2021)).

Que en relación a ello cabe mencionar que los sumariados no han cuestionado las operaciones en cuanto a su existencia.

Que en el mismo orden de ideas, cabe señalar que al momento de la inspección, el Sujeto obligado no realizó un análisis sobre las inusualidades de dichos clientes y, consecuentemente, omitió reportarlas como operaciones sospechosas a la UIF conforme fuera detallado en la Resolución de Apertura.

Que por otro lado, en el Grafico1 del Informe Final de la Dirección de Supervisión (Orden N° 15) se observa la cantidad de premios cobrados por clientes y/o conversiones de valores realizados.

Que, Tomando diez clientes que obtuvieron mayor monto de premios cobrados en el periodo de estudio, dos de ellos mostraban una diferencia muy significativa a saber: S. B. cobro premios en 168 ocasiones por el valor de PESOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS SEIS (\$47.408.706) (periodo de estudio 04/01/2021 al 29/12/2021) y; C. R. cobro premios en 168 oportunidades por el valor de PESOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA (\$46.017.670) (periodo de estudio 11/02/2021 al 30/12/2021).

Que se puede observar que los dos clientes con mayor monto cobrado muestran una diferencia significativa con respecto al resto de los otros clientes analizados.

Que ante lo expuesto y considerando los montos elevados y la frecuencia alta de los clientes observados, la Instrucción compartió el criterio de la Dirección de Supervisión. El Sujeto Obligado omitió cumplir con la obligación de informar las operaciones sospechosas conforme lo dispone el artículo 19 inciso 1 y 2 de la Resolución UIF N° 199/2011 y modificatorias.

Que por las características de las operaciones, cabe señalar que no existe prueba alguna de realización de un análisis de las operaciones de los clientes mencionados ut supra como inusuales, destacándose que, tal y como se ha expresado precedentemente, BINGO P [REDACTED] no contaba con herramientas tecnológicas acordes a su desarrollo operacional ni tenía implementada medidas que le permitan consolidar electrónicamente las operaciones realizadas por los clientes que les permita analizar y monitorear distintas variables. El Sujeto Obligado tampoco acompañó registros o prueba documental de otro tipo que indicase que se analizaron las alertas, inusualidades y en sí, la operatoria.

Que las operaciones observadas de dichos clientes fueron por montos elevados y con frecuencia alta, como indicadores de alerta de la actividad, que al no ser detectada por el Sujeto Obligado, omitió su tratamiento como inusualidad.

Que, a mayor abundamiento, la característica propia de la operatoria de los clientes SB y CRA, consistente en una inusual frecuencia de premios ganados imponía, al menos, la obligación de tratarla como una operatoria inusual y verificar si la misma no presentaba un carácter sospechoso.

Que resulta oportuno agregar que tampoco se acreditó en autos la realización de ninguna de las tareas que impone el artículo 19 de la Resolución UIF N° 199/2011 en los casos de operaciones inusuales, que establece, para tales supuestos, la obligación de *"profundizar el análisis de las mismas, con el fin de obtener información adicional que corrobore o revierta la/ s inusualidad/ es, dejando constancia por escrito de las conclusiones obtenidas y de la documentación respaldatoria verificada, conservando copia de la misma"*.

Que cabe destacar al respecto que la documentación recabada de los legajos de clientes de la Sociedad se limitaba, en la mayoría de los casos, a la siguiente: DNI del cliente (RENAPER), CUIL/CUIT, domicilio real, empresa donde desarrolla sus tareas, actividad registrada en la AFIP y si es PEP son tomados de las bases de datos de NOSIS.

Que en definitiva, en relación con las defensas efectuadas por los sumariados, sus manifestaciones no logran desvirtuar el incumplimiento imputado, ya que ha quedado constatado que no se brindó a las operaciones de los clientes SB y CRA el tratamiento que la normativa vigente impone frente a las operaciones inusuales, siendo que las características de su operatoria imponían asignarle, cuanto menos, ese carácter.

Que queda claro que existe, por parte del Sujeto Obligado, una clara ausencia de políticas y sistema de prevención de PLA/FT como así también una falta de análisis y detección de operaciones sospechosas extremo que deriva en la omisión del Sujeto Obligado de detectar inusualidades en las operaciones que se llevan a cabo. En consecuencia, dichas operaciones y tal como surge del informe de supervisión debieron ser analizadas por el Sujeto Obligado y reportadas.

Que en conclusión, teniendo en consideración la operatoria del cliente, la documentación aportada, el volumen de los montos operados en los períodos analizados y la obligación por parte del Sujeto Obligado de conocer a sus clientes, se constató que el cliente SB recibió premios por la suma total de PESOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS SEIS (\$47.408.706) y CRA de PESOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA (\$46.017.670) sin la documentación adecuada para justificar en forma razonable las sumas apostadas. Que por todo lo expuesto, la Instrucción concluyó que el cargo por falta de análisis y detección de operaciones sospechosas se encuentra acreditado en infracción los artículos 21 inciso b) de la Ley N° 25.246, vigente al momento en que los hechos objeto del sumario tuvieron lugar, y 19 inciso 1) y 2) de la Resolución UIF N° 199/2011 y modificatorias se

encuentra acreditado y sugirió la aplicación de una sanción de multa de una vez el valor de las operaciones involucradas por un total de PESOS NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS (\$93.426.376) .

Que en este estado, y luego del análisis de las distintas infracciones imputadas, corresponde señalar que en la tramitación de las presentes actuaciones se ha cumplido con el debido proceso adjetivo que impone el inciso 8 del artículo 14 de la Ley N° 25.246, y que el inciso f) del artículo 1° del Decreto-ley N° 19.549/72 garantiza para los procedimientos administrativos –entre ellos los sancionadores- como comprensivo de la posibilidad de ser oído, ofrecer y producir prueba y obtener una decisión fundada (conf. Tawil, Guido Santiago “Procedimiento Administrativo”, Abeledo Perrot, 2010, p. 535; Dictamen PTN 223:128; y fallos CSJN 186:297 y 207:293).

Que con ello, a su vez, se ha dado cumplimiento con la garantía de la tutela efectiva prescripta por el artículo 18 y el inciso 22 del 75 de la Constitución Nacional y artículo 8° de la Convención Americana de Derechos Humanos y su aplicación al procedimiento administrativo a la luz de lo resuelto por la CSJN (Fallos 325:1649 “Banco Integrado Departamental” y 327:1249 “Atienza”), y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos “Tribunal Constitucional vs. Perú” (sentencia del 31 de enero de 2001) y “Baena Ricardo y otros vs. Panamá” (sentencia del 2 de febrero de 2001).

Que, asimismo, las conclusiones a las que ha arribado la Dirección de Régimen Administrativo Sancionador, tanto en lo que hace al procedimiento seguido para la comprobación de los presuntos incumplimientos detallados en la Resolución de Apertura así como para el correspondiente aconseje sancionatorio, se encuadran en el ejercicio de su competencia específica (Resoluciones UIF Nros. 111/2012 y 127/2023).

Que en lo que respecta a las sanciones a aplicar es menester recordar que el inciso 1 del artículo 24 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, vigente al momento en que los hechos objeto del presente sumario tuvieron lugar, establecía que la persona que actuando como órgano o ejecutor de una persona jurídica o la persona de existencia visible que incumpla alguna de las obligaciones ante esta UIF sería pasible de sanción de multa.

Que dichas previsiones normativas se encuentran alineadas a los estándares internacionales en la materia toda vez que la Recomendación N° 35 del GAFI establece que los países deben asegurar la existencia de una gama de sanciones eficaces, proporcionales y disuasivas, y que las mismas deben ser aplicables no sólo a las instituciones financieras y a las actividades y profesiones no financieras designadas, sino también a sus directores y a la alta gerencia.

Que, asimismo, debe tenerse presente que la finalidad esencial de las sanciones que aplica esta UIF es la prevención y disuasión de conductas reprochables y que ello tiende a evitar la reiteración de los incumplimientos por parte de los sumariados.

Que en tal sentido, mediante el inciso 3 del artículo 24 de la referida Ley 25.246, vigente al momento en que los hechos objeto del sumario tuvieron lugar, se establecía un monto mínimo y un máximo de la multa (entre \$10.000 y \$100.000) para aquellos casos en que no pudiera determinarse el valor real de los bienes involucrados en la operación.

Que respecto al quantum de la sanción, es dable señalar que en numerosas oportunidades se ha dicho que la determinación y graduación de la sanción es resorte primario de la autoridad administrativa, principio que solo cede ante una manifiesta arbitrariedad (conf. “Musso, Walter c. Prefectura Naval Argentina”, sentencia C.N.A.C.A.F. del 27.05.1997; “Alles, Gerónimo c. Prefectura Naval Argentina” sentencia C.N.A.C.A.F., sala III, del 03.02.1998; “Travaglia, José O. y otros c/ BCRA – Resolución N° 109/2012 –Expte. 100.045/94 Sum. Fin. N°

893- sentencia C.N.A.C.A.F., sala V, del 19.07.2006; y “Transatlántico S.A. Caja de Cambio y otros c. BCRA-Resol.419/2011 – Expte. 100.661/04 Sum. Fin. 1138” sentencia C.N.A.C.A.F., sala II, del 10.07.2012, entre otros).

Que, sin embargo, debe indicarse que el procedimiento administrativo que se despliega a fines de efectivizar el régimen sancionatorio de la UIF debe asegurar la vigencia del principio de razonabilidad en el ejercicio de la potestad sancionatoria, manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que se deben tutelar, a fin de que respondan a lo necesario para la satisfacción de su cometido.

Que en definitiva, no resulta exigible una exacta correspondencia numérica entre la multa y la infracción cometida, sino que es suficiente que la autoridad de aplicación realice una apreciación razonable de los diferentes parámetros legales previstos y las circunstancias fácticas tenidas en cuenta para justificar la sanción (Fallo “Swiss Medical S.A. c. DNCI s/ defensa del consumidor - ley 24.240 art. 4”, sentencia C.N.A.C.A.F, Sala V del 14.07.2015).

Que en consecuencia, resulta pertinente enunciar cuáles son en el caso objeto de análisis, los factores de ponderación que sirven de guía para la cuantificación de las sanciones previstas en el capítulo IV de la Ley N° 25.246 y modificatorias, a saber: (i) El tipo de sujeto obligado: se ponderó que el Sujeto obligado que tiene como actividad habitual explota juegos de azar, como tal, se encuentra expuesta a grandes riesgos en materia de LA/FT; (ii) la naturaleza de cada una de las infracciones constatadas y el riesgo que representan; y (iii) la falta de antecedentes de los sumariados ante esta Unidad.

Que por todos los factores de ponderación señalados ut supra, la Instrucción formó su sana convicción respecto del monto de la sanción aconsejada.

Que en tal entendimiento, se comparten las conclusiones arribadas por la Instrucción en el Informe Final respecto de la constatación de los cargos endilgados en la Resolución de Apertura y de los montos de las multas propuestos, por considerarlos razonables y proporcionales a los cargos imputados.

Que la Dirección del Régimen Administrativo Sancionador ha tomado la intervención de su competencia.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha emitido el dictamen correspondiente.

Que la presente Resolución se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N° 25.246 y sus modificatorias y el, Decreto Nro. 290 del 27 de marzo de 2007 y sus modificatorios.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º. DECLARAR la responsabilidad e IMPONER la sanción de multa de PESOS NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS (\$ 93.626.376) al Sr. Jonatan Sebastián S [REDACTED] (DNI N°30. [REDACTED]099) en su doble carácter de Oficial de Cumplimiento y miembro del órgano de administración del Sujeto Obligado a la fecha en que los hechos tuvieron lugar, por haber incumplido las disposiciones contenidas en los artículos 20 bis, 21º incisos a) y b) y 21 bis de la Ley N° 25.246, según texto vigente al momento en que los hechos objeto del sumario tuvieron lugar, y los artículos 3º incisos e),

f) y g) y 19 incisos 1) y 2) de la Resolución N° 199/2011 y sus modificatorias, conforme el detalle de los siguientes incumplimientos detectados:

a. Multa de PESOS CIEN MIL (\$100.000) por las deficiencias detectadas en la implementación de las herramientas tecnológicas en infracción al artículo 3° incisos f) y g) de la Resolución UIF N° 199/2011.

b. Multa de PESOS CIEN MIL (\$100.000) por las deficiencias detectadas en el Registro y Análisis de Gestión de Riesgo en infracción al artículo 3° inciso e) de la Resolución UIF N° 199/2011.

c. Multa de PESOS NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS (\$93.426.376) por incumplir la obligación de análisis, detección y reporte de operaciones sospechosas en infracción al artículo 19 incisos 1) y 2) de la Resolución UIF N° 199/2011 y 21 inciso b) de la Ley N° 25.246, según texto vigente al momento en que los hechos objeto del sumario tuvieron lugar.

ARTÍCULO 2°. Imponer a BINGO P[REDACTED] S.A. (CUIT N° 30-[REDACTED]2756-3) una sanción de multa de PESOS NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS (\$ 93.626.376) de acuerdo con el detalle obrante en el artículo 1°. precedente de conformidad a lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 24 de la Ley N° 25.246 según texto introducido por el artículo 19 de la Ley N° 26.683, vigente al momento de los hechos.

ARTÍCULO 3°. – Notifíquese e intímese a los sumariados a hacer efectivo el pago de las multas impuestas dentro del plazo de DIEZ (10) días de notificada la presente Resolución, el que deberá materializarse mediante el Sistema de Recaudación de la Administración Pública –eRecauda- (<https://erecauda.mecon.gov.ar>) bajo apercibimiento de iniciarse la correspondiente ejecución.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber a los sumariados que la presente Resolución agota la vía administrativa y que podrá recurrirse en forma directa ante la CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL en el plazo de TREINTA (30) días hábiles judiciales , contados a partir de la fecha de su notificación conforme lo dispuesto en el artículo 25 bis de la Ley N°19.549 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 5°. - Regístrese, comuníquese, cumplido, archívese.